



**REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO**

Yopal – Casanare, diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

Ref. : ACCION DE TUTELA  
Derecho de petición Art. 23 Constitucional.  
Accionante: JOSÉ GILBER CATAÑO ROJAS  
Accionado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA  
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS  
VICTIMAS  
Radicación: 85001-33-33-002-2016-00058-00

Se procede a dictar la sentencia que corresponda en el asunto de la referencia, una vez concluido el trámite especial establecido en el Decreto 2591 de 1991 que desarrolla el artículo 86 de la Constitución Nacional y recaudados informes de la accionada en lo posible, en razón a que no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado.

**OBJETO DE LA DEMANDA:**

El ciudadano JOSÉ GILBER CATAÑO ROJAS de manera directa acude a esta figura de rango constitucional, a fin que se ampare y proteja el derecho fundamental de petición, que según señala en su escrito ha sido conculcado y/o violado por la autoridad accionada (Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas) al no dar contestación y/o resolver en tiempo su solicitud inicial de pago de la ayuda humanitaria, en su reconocida condición de Víctima de desplazamiento.

Para sustentar su solicitud adjunta:

- a. Fotocopia de cédula de ciudadanía del señor JOSÉ GILBER CATAÑO ROJAS al igual que de MARÍA JACINTA BOHÓRQUEZ BARRERA (fls 9 y 10).

- b. Fotocopia de registro civil de nacimiento del menor DIEGO ALEJANDRO CATAÑO BOHÓRQUEZ (fl. 11).
- c. Fotocopia informal de respuesta dada por la Dirección de Registro y Gestión de la Unidad Administrativa Especial para la atención y reparación de víctimas y dirigida a JOSÉ GILBER CATAÑO ROJAS (figura como fecha el 15 de enero de 2015 y dice responder a Derecho de Petición) (fl. 12).
- d. Fotocopia de oficio de fecha 6 de febrero de 2016 dirigido a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación de Víctimas, teniendo como referencia petición en interés particular y asunto: solicitud auxilio humanitario (fls 13 al 15).
- e. Constancia de envío a través de correo electrónico del derecho de petición de José Gilber Cataño Rojas, el día 6 de febrero de 2016 (fl. 16).
- f. Constancia de afiliación de JOSÉ GILBER CATAÑO ROJAS al registro único de afiliados a la protección social perteneciente al régimen subsidiado en la EPS CAPRESOCA desde el 28 de marzo de 2014, encontrándose a la fecha del 26/02/2016 en condición de activo (fls 17 al 19).

Se deja constancia que en el capítulo de pruebas de la demanda dice acompañar documentación referente a copia de certificación del registro único de víctimas (RUV) donde se acredita su condición de desplazado; sin embargo, al revisar los anexos no se adjunta dicha documental, trayendo solo las pruebas señaladas arriba.

#### **ANTECEDENTES:**

Señala la accionante en su escrito introductorio de la demanda lo siguiente:

Que es víctima del conflicto armado que ha azotado al País, condición que le fuera reconocida e incluida en el registro único de víctimas, habiendo sido desplazado forzosamente desde Morcote – Boyacá hacia el municipio de Nunchía Casanare.

Arguye que actualmente pasa por una grave y precaria situación económica, producto del desplazamiento forzado, que se encuentra sin poder rehacer su proyecto de vida, porque actualmente no cuenta con ingresos y se halla en un estado de indefensión.

Alude que por las razones anteriores, remitió un escrito de derecho de petición a la Unidad Administrativa Especial para la Atención de las Víctimas el día 6 de febrero de 2016 solicitando la ayuda humanitaria, al igual que ha realizado varias peticiones verbales, pero que hasta la presente no se le ha dado respuesta alguna, vulnerando de esta forma el derecho de petición.

Que tiene un menor de 6 años dificultándose garantizarle el sustento.

### **ACTUACIÓN JURÍDICO-PROCESAL:**

La acción de tutela fue interpuesta ante la Oficina de Apoyo de Administración Judicial de esta ciudad el 29 de Febrero de 2016, sometida a reparto en la misma fecha, allegada a la Secretaría del Despacho al día siguiente y admitida la demanda por auto del 1º de marzo de la presente anualidad que obra a folio 22 de las diligencias, en el mismo se le concedió a la entidad accionada un término de tres (3) días para que informara lo correspondiente a la petición del ciudadano tutelante.

#### ***Pronunciamiento de la UARIV:*** (fls 26 al 28).

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, allega escrito de contestación de tutela manifestando entre otras que el caso concreto de JOSÉ GILBER CATAÑO ROJAS, actualmente la unidad se encuentra adelantando el referido proceso de identificación de carencias, el cual determinará en qué etapa de atención deberá ser atendido el hogar o si por el contrario no es la medida de atención humanitaria la medida de asistencia que requiere el hogar.

Por lo anterior, considera que nos encontramos ante una situación jurídica de carencia de objeto por hecho superado, pues la entidad inició las acciones pertinentes que permiten asegurar el derecho a la subsistencia mínima del accionante.

Concluye que puede observarse claramente que frente al caso concreto la entidad ha actuado de manera diligente y en ningún momento se ha sustraído de las obligaciones que respecto a la población en condición de desplazamiento le corresponde asumir

## CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS:

### ***Competencia:***

Este operador judicial investido de la función constitucional – para el caso específico - que le otorga la Carta Magna, a través de su Despacho es competente para proceder a proferir sentencia dentro de la acción especialísima de la tutela, de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, pues la Constitución Política de 1991 instituyó la jurisdicción constitucional en los Jueces de la República; igualmente, de acuerdo a lo señalado en el Decreto 1382 de 2000 y al factor territorial por el lugar donde presuntamente se pudieren estar poniendo en peligro, amenazando o quizás vulnerando derechos fundamentales.

### ***Procedibilidad de la Acción de Tutela:***

La Constitución Política de 1991 cuyo máximo fruto – En opinión de expertos analistas del tema y que este administrador judicial comparte - ha sido la puesta en marcha de la institución de la tutela, que en sentido estricto es un derecho subjetivo público de la persona o individuo, un mecanismo excepcional diseñada en hora buena por el constituyente del 91 para amparar y proteger los derechos fundamentales, cuando estos pudieren ser puestos en peligro, o efectivamente violados, amenazados o desconocidos por alguna autoridad o por un particular que tenga la obligación de prestar el servicio público, y especialmente para evitar que las personas encargadas de prestarlos no abusen de los particulares que se ven obligados a acudir a esas entidades en procura de un servicio urgente.

Sin embargo, pasados más de 24 años de la puesta en marcha de esta herramienta se ha decantado de manera paulatina el abuso de esta figura principalísima, utilizándose para defender derechos económicos de grandes emporios, terratenientes y empresas que sin asomo de escrúpulos han intentado por intermedio de esta noble figura lograr objetivos que no alcanzaron a través de otros medios jurídicos dispuesto para ello, intentando de esta forma esquivar y dejar de lado los fines altruistas que buscó la constituyente, aunado a la aquiescencia de algunos funcionarios no probos cuya reputación queda en

duda por sus actuaciones, sacrificando de paso en no pocas ocasiones derechos de trabajadores, campesinos despojados de sus tierras y en general personas del común. Lo anterior ha dado pie a posiciones extremas de voces que sin sonrojarse piden acabar y/o modificar tan especial instrumento jurídico, sin valorar los grandes beneficios que le ha prestado al conglomerado social de las clases menos favorecidas que han visto en él una tabla de salvación a situaciones en las cuales se ha visto comprometido hasta el don más preciado de la vida.

Ha reiterado en pronunciamientos anteriores este Despacho que esta acción tiene dos particularidades esenciales a saber: *la subsidiariedad y la inmediatez*; el primero por cuanto sólo resulta procedente cuando el perjudicado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable y, el segundo, porque se trata de un instrumento jurídico de protección inmediata que es viable cuando se hace preciso disponerla en guarda efectiva, concreta y actual del derecho fundamental sujeto a vulneración o amenaza.

***Legitimación por activa:***

El artículo 86 de la Carta Política establece que las personas pueden interponer acción de tutela para reclamar ante los jueces mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia T-1020 de 30 de octubre de 2003, indicó que: *"la acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas "nacionales o extranjeras, naturales o jurídicas, (...) independientemente de si es ciudadano o no. De manera que pueden interponerla los nacionales, los extranjeros, los que se encuentran privados de su libertad, los indígenas e inclusive los menores de edad. No hay diferenciación por aspectos tales como raza, sexo o condición social, lo que indica que todo ser humano que se halle en territorio colombiano puede ejercer la acción, o, en el evento en que no se encuentre allí, cuando la autoridad o particular con cuya acción u omisión se vulnera el derecho fundamental se halle en Colombia"*.

En consecuencia, el accionante JOSÉ GILBER CATAÑO ROJAS se encuentra habilitado para interponer esta clase de acción constitucional especial; por cuanto así lo determina el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991.

***Legitimación por pasiva:***

La Unidad Administrativa Especial Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en calidad de autoridad pública está legitimada como parte pasiva en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, debido a que se le atribuye la violación de los derechos fundamentales en discusión.

***Derecho invocado y jurisprudencia aplicable:***

El derecho principal presuntamente quebrantado se encuentra en la Constitución Política en su artículo 23 consagrando el *derecho de petición* como un derecho fundamental en virtud del cual se otorga a los ciudadanos la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una resolución oportuna y completa sobre el particular. Como lo ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia constitucional, para la satisfacción de ese derecho la respuesta debe ser oportuna, debe resolver el asunto de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumplen esos presupuestos se incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición.

Ahora, en cuanto a la oportunidad para resolver resulta aplicable el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (introducido a tal normatividad por la Ley Estatutaria No. 1755 del 30 de junio de 2015), el cual indica que las autoridades deben resolver o contestar las peticiones dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de recepción del escrito y para el evento de que no les sea posible resolver o contestar dentro de ese plazo, la misma norma impone a las autoridades la obligación de informarlo al interesado “... *antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto*”.

Por razón de lo anterior, en la perspectiva puramente formal, la acción impetrada es procedente; la misma se encamina a establecer desde un punto de vista material o sustancial si efectivamente dicho derecho de raigambre constitucional fundamental y otros de la misma estirpe y connotación (mínimo vital), han sido conculcados o están amenazados por la omisión de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a dar respuesta a lo solicitado por el petente en cuanto a manifestarse sobre la ayuda humanitaria a la que de acuerdo a su criterio e interpretación tiene derecho, sustentando su petición los componentes de reparación de la ley 1448 de 2011 *“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”*, por su ya reconocida calidad de Víctima del conflicto armado interno.

Conforme a jurisprudencia de la máxima guardiana de la carta política, el derecho invocado por el accionante como vulnerado ha sido calificado como fundamental para lo cual existe esta protección especial. Al respecto esa altísima Corporación en sentencia T-908 del 26 de noviembre de 2014, con ponencia del Magistrado Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, en la que fungió como Accionante: MARÍA NIDIA GALLO CALLE y Accionado: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS “UARIV”; ha ilustrado que:

***“3.1. El derecho fundamental de petición en el marco del procedimiento de reparación administrativa a las víctimas.***

*3.1.1. La Constitución Política establece en el artículo 23: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. De ahí que, el derecho fundamental de petición puede ser entendido desde dos dimensiones, por un lado la facultad de la persona de formular una petición respetuosa ante las autoridades, y por otra parte, el derecho a recibir de ellas una respuesta rápida y de fondo.*

*3.1.2. Del mismo precepto constitucional, se desprende que el ejercicio del derecho de petición es una manifestación directa de la facultad de acceso a la información que le asiste a toda persona (art. 20 C.P.), así como un medio para lograr la satisfacción de otros derechos, como el debido proceso, el trabajo, el acceso a la administración de justicia, entre otros.*

3.1.3. Por la anterior, la satisfacción de este derecho se encuentra condicionada a que la entidad emita y entregue al peticionario una respuesta que abarque en forma sustancial y resuelva, en lo procedente, la materia objeto de solicitud, independientemente del sentido. Ello quiere decir que la respuesta negativa comunicada al peticionario dentro de los términos establecidos no significa una vulneración del derecho de petición, puesto que si efectivamente lo contestado atiende de fondo el asunto expuesto se satisface el derecho mencionado. En efecto, la respuesta puede o no satisfacer los intereses de quien ha elevado la petición, en el sentido de acceder o no a sus pretensiones, pero siempre debe ser una contestación que permita al peticionario conocer, frente al asunto planteado, cuál es la situación y disposición o criterio de la entidad competente.<sup>[14]</sup>

3.1.4. En síntesis, la Corte ha concluido que la respuesta al derecho de petición debe cumplir con ciertas condiciones: (i) oportunidad; (ii) debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado<sup>1</sup>; (iii) ser puesta en conocimiento del peticionario, so pena de incurrir en la violación de este derecho fundamental.

3.1.5. Con base en lo anterior, se concluye que es un criterio reiterado por la jurisprudencia constitucional que el incumplimiento de alguno de los requisitos mencionados conlleva a la vulneración del derecho de petición, pues impide al ciudadano obtener respuesta efectiva y de fondo al requerimiento que presentó ante la entidad, que en la mayoría de los casos –vale la pena recordarlo– busca hacer efectivo otro derecho ya sea de rango legal o constitucional.

....

4.4.2. Una vez revisado el contenido de la respuesta expedida por la UARIV el 21 de noviembre de 2013, la Sala encuentra que la misma no cumple con los requisitos jurisprudenciales del derecho de petición. Si bien es cierto la respuesta de la accionada guarda cierta congruencia con lo pedido, también lo es que no resolvió de manera clara, precisa y de fondo las peticiones de la señora Gallo Calle, pues a pesar de que en esta solicitud y en escritos presentados con anterioridad ante la Unidad de Víctimas, la peticionaria le había puesto de presente su presunta calidad de compañera permanente de Carlos Alberto Dávila (víctima), así como la existencia de Mary Alejandra Dávila Gallo, presunta hija del mismo<sup>[25]</sup>; la entidad accionada solo se limitó a negar la solicitud de pago de la indemnización administrativa argumentando que dicho rubro fue cancelado a los padres y hermanos de la víctima, sin que diera información alguna respecto del estado del trámite de revocatoria, que fue solicitado por la accionante en el escrito de petición del 5 de junio de 2013, en los siguientes términos: “se inicie el trámite de revocatoria de las medidas de reparación”. Considera la Sala que tal omisión es inaceptable si se tiene en cuenta que por disposición legal (art 5° del Decreto 1290 o art. 150 del Decreto 4800/11), la hija y la compañera permanente de la víctima, en comparación con los padres y hermanos de la misma, tienen prelación en el orden de

*beneficiarios para efectos de la distribución de la indemnización administrativa.*

....

*1.2. Una vez cotejada la actuación de la entidad con el petitum de la demanda de tutela, la Sala encuentra que la UARIV vulneró los derechos fundamentales de petición y en consecuencia al debido proceso administrativo, por cuanto no resolvió de manera clara, precisa y de fondo la petición de reparación administrativa presentada por la señora Gallo Calle. Lo anterior, por cuanto la accionada omitió pronunciarse sobre la solicitud de revocatoria de las medidas de reparación que hizo la accionante con base en su presunta calidad de compañera permanente de la víctima y la existencia de una hija que nació a partir de esa relación. Teniendo en cuenta que en este caso se trató de una petición enmarcada dentro del procedimiento para la reparación administrativa de las víctimas, la Sala considera que el desconocimiento de los presupuestos jurisprudenciales del derecho de petición produjo en consecuencia la vulneración del derecho al debido proceso administrativo”.*

De tiempo atrás, en relación con el Derecho de Petición la Corte Constitucional ha establecido ciertos parámetros (Sentencia T-377/2000), a saber:

- a. El Derecho de Petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.
- b. El núcleo esencial del Derecho de Petición radica en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
- c. La Respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
- d. Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.
- e. Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

(Tomado del libro *Acción y Procedimiento en la Tutela de Carlos José Dueñas Ruíz*, páginas 399 y 400, Quinta Edición, Librería Ediciones del Profesional Ltda.).

Y el Consejo de Estado, en sentencia constitucional de segunda instancia del 4 de febrero de 2009, con ponencia de la Magistrada de la Sección Cuarta Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, en el radicado 080012331000-2008-00566-01(AC), Actor Víctor Modesto de Vega González, Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde precisó:

*“En primer lugar, advierte la Sala que el artículo 23 de la Constitución Nacional establece:*

*“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”*

*De la norma constitucional transcrita se observa que la formulación de una petición implica correlativamente para la autoridad ante la cual se presenta, la obligación de dar respuesta oportuna y de fondo a la solicitud del peticionario, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido<sup>1</sup>.*

*Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser notificada al peticionario. El no cumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del derecho fundamental de petición.*

*En relación con la oportunidad de la respuesta, el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo señala 15 días para resolver, sin embargo ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso la autoridad debe explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. En este caso el criterio de razonabilidad deberá tener en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.*

*Es claro que las autoridades públicas deben actuar con eficacia y celeridad, por lo cual deben ser diligentes en el trámite y resolución de las solicitudes que ante ellas se presentan. Cualquier desconocimiento injustificado de los plazos establecidos en la ley implica la vulneración del derecho fundamental de petición.*

*De otro lado, se comparte lo considerado por la jurisprudencia constitucional en cuanto no son válidas ni efectivas las respuestas a través de las cuales se le informa al interesado sobre el trámite que se está adelantando o que se pretende realizar<sup>2</sup>.*

<sup>1</sup> Corte Constitucional, Sentencia T-1150 de 2004, MP: HUMERTO ANTONIO SIERRA PORTO, 17 de noviembre de 2004, Exp. T - 961534

<sup>2</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-235 del 4 de abril de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

Conforme a la ley 1448 del 10 de junio de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” en su artículo 3º establece:

*“ARTÍCULO 3o. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.*

*También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.*

*De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.*

*La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima”.*

Por su parte, en relación específicamente a la atención a víctimas de desplazamiento forzado, el artículo 60 de la ley antes citada señala:

**“ARTÍCULO 60. NORMATIVIDAD APLICABLE Y DEFINICIÓN.** *La atención a las víctimas del desplazamiento forzado, se regirá por lo establecido en este capítulo y se complementará con la política pública de prevención y estabilización socioeconómica de la población desplazada establecida en la Ley 387 de 1997 y demás normas que lo reglamenten.*

*Las disposiciones existentes orientadas a lograr el goce efectivo de los derechos de la población en situación de desplazamiento, que no contraríen la presente ley, continuarán vigentes.*

**NOTA:** *El texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-280 de 2013, el resto de texto de este inciso declarado EXEQUIBLE por la misma Sentencia.*

**Parágrafo 1º.** *El costo en el que incurra el Estado en la prestación de la oferta dirigida a la población desplazada, en ningún caso será descontado del monto de la indemnización administrativa o judicial a que tiene derecho esta población.*

*Esta oferta, siempre que sea prioritaria, prevalente y que atienda sus vulnerabilidades específicas, tiene efecto reparador, exceptuando la atención humanitaria inmediata, de emergencia y de transición.*

**NOTA:** *Inciso segundo de este parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-280 de 2013.*

**Parágrafo 2º.** *Para los efectos de la presente ley, se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada*

a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3° de la presente Ley.

**NOTA: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-280 de 2013”.**

A su turno el artículo 62 de la misma, precisa:

**“ARTÍCULO 62. ETAPAS DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA.** Se establecen tres fases o etapas para la atención humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado:

1. Atención Inmediata;
2. Atención Humanitaria de Emergencia; y
3. Atención Humanitaria de Transición.

**Parágrafo.** Las etapas aquí establecidas varían según su temporalidad y el contenido de dicha ayuda, de conformidad a la evaluación cualitativa de la condición de vulnerabilidad de cada víctima de desplazamiento que se realice por la entidad competente para ello”.

Y el artículo 65 establece la definición de la atención humanitaria de transición, así:

**“ARTÍCULO 65. ATENCIÓN HUMANITARIA DE TRANSICIÓN.** Es la ayuda humanitaria que se entrega a la población en situación de Desplazamiento incluida en el Registro Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta las características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia.

**Parágrafo 1°.** El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá adelantar las acciones pertinentes para garantizar la alimentación de los hogares en situación de desplazamiento. De igual forma, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los entes territoriales adoptarán las medidas conducentes para garantizar el alojamiento temporal de la población en situación de desplazamiento.

**Parágrafo 2°.** Los programas de empleo dirigidos a las víctimas de que trata la presente ley, se considerarán parte de la ayuda humanitaria de transición.

**Parágrafo 3°.** Hasta tanto el Registro Único de Víctimas entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del Registro Único de Población Desplazada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 154 de la presente Ley”.

**Aplicación al caso concreto:**

Vistos los anteriores planteamientos Jurisprudenciales y legales, ubicándonos dentro del contexto propio del caso constitucional en estudio, este operador judicial deberá determinar, en primer lugar, si las probables omisiones endilgadas por el demandante a la demandada se encuentran demostradas, y en segundo término si al existir las mismas, se desprende violación, amenaza o vulneración al derecho alegado por el accionante u otro que se considere por esta instancia en tal condición.

Como se puede constatar en el presente asunto, el tema que ocupa nuestra atención es la posible vulneración de derechos fundamentales en que pudo incurrir la accionada **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, al no establecer respuesta a la petición del señor JOSÉ GILBER CATAÑO ROJAS.

En ese sentido, este estrado judicial encuentra probado que el accionante en mención, adelantó inicialmente ante la hoy accionada, solicitud de inclusión en el Registro Único Nacional de Víctimas; que ésta le fue atendida y resuelta de manera favorable tal como se desprende de la fotocopia de documento allegado a folio 12 firmado por funcionaria de la *UARIV*; en igual forma, se constata que con fecha 6 de febrero de 2016 realizó una petición de solicitud de auxilio o ayuda humanitaria a la mencionada entidad, sin embargo hasta el momento de interponer la tutela el 29 de febrero de 2016 no había recibido respuesta alguna, allí radica su inconformidad; en consecuencia, debe determinarse entonces por parte de este administrador judicial investido de facultades constitucionales, hasta qué punto la actuación administrativa viola los derechos enlistados (petición y mínimo vital).

La entidad accionada señala que se está frente a una situación de carencia de objeto por hecho superado, por cuanto actualmente la unidad se encuentra adelantando proceso de identificación de carencias, el cual determinará en qué etapa de atención deberá ser atendido el hogar o si por el contrario no es la medida de atención humanitaria la medida de asistencia que requiere el hogar y que la entidad ha actuado de manera diligente y en ningún momento se ha sustraído de las obligaciones que respecto a la población en condición de desplazamiento le corresponde asumir

Conforme a lo señalado por las partes cada uno desde su óptica, debemos evaluar la situación que se presenta y colegir si se están vulnerando derechos del hoy demandante.

**Conclusión:**

Interpretando armónicamente los preceptos antes citados y aplicables al caso *sub-judice*, encuentra este operador judicial que a pesar del escaso material probatorio allegado, se establece en el caso puesto en conocimiento de este operador investido como juez constitucional que la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS** ha omitido dar respuesta oportuna y de fondo al Derecho de **Petición** impetrado por el señor JOSÉ GILBER CATAÑO ROJAS sin explicarle por escrito y responderle de manera clara y precisa su solicitud de ayuda humanitaria y los resultados a su condición de víctima de la violencia.

Dicha situación vulnera el derecho fundamental constitucional de **Petición** e incluso la dignidad humana, por cuanto la entidad estatal está en la obligación de darle el correspondiente trámite, expidiendo la respectiva respuesta en forma oportuna y comunicarle la decisión al interesado a la solicitud que se está efectuando y prestando la ayuda que la ley establece y no esperando a que se interponga una tutela por el afectado, para de manera ligera manifestar que se están realizando nuevos estudios y por lo cual debe esperar tiempo indefinido.

La extemporánea respuesta dada por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de fecha 4 de marzo de 2016, no satisface los requerimientos realizados por el petente, pues deja entrever que se continuará realizando monitoreo y visitas al desplazado para determinar en qué etapa de atención debe ser encuadrado el hogar.

Así las cosas, el hoy accionante al demostrar tener la calidad reconocida de víctima con su núcleo familiar y no recibir oportunamente la asistencia que la normatividad consagra para estos eventos, promovió un derecho de petición

remitido a la entidad accionada a su correo electrónico y con fecha de recibido en tal organismo el día 6 de febrero de 2016 (así se desprende de las documentales obrantes a folios 13 al 16 del expediente), sin embargo la respuesta que hasta el 9 de marzo fue allegada al Despacho desconociéndose en este momento si el afectado ya fue notificado de la misma; por lo tanto considera este operador judicial que no se puede dar como superada la situación que se presenta.

En conclusión, se tutelaré el derecho fundamental de **Petición** al ciudadano JOSÉ GILBER CATAÑO ROJAS y los demás conexos con éste, para que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS en cabeza de su Directora General, en el término improrrogable de 48 horas proceda a dar respuesta al escrito contentivo de la solicitud impetrada por éste; lo cual no implica solamente informar qué ha sucedido con la petición radicada el 6 de febrero de 2016, sino que debe entrar a resolver la misma, en el sentido de suministrarle dentro de los Diez (10) días siguientes la AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA a que legalmente tiene derecho al ser reconocido y registrado como víctima; así mismo, determinar definitivamente a qué otros derechos puede acceder en la prenombrada condición y sin dilación alguna proporcionárselos.

No habrá lugar a condena en costas al no reunirse los presupuestos procesales para ello, más tratándose una acción de estirpe constitucional.

Conforme a lo expuesto, el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal Casanare, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Política de Colombia,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO.- TUTELAR** el derecho fundamental de petición y demás conexos con éste, quebrantados al ciudadano JOSE GILBER CATAÑO ROJAS por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO.-** Ordenar, en consecuencia, al señor DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, que dentro del término perentorio de 48 horas contadas a partir de que tenga conocimiento de este fallo – si es que aún no lo ha hecho - proceda a dar respuesta al escrito contentivo de la solicitud impetrada por el señor JOSÉ GILBER CATAÑO ROJAS; lo cual no implica solamente informar qué ha sucedido con la petición radicada el 6 de febrero de 2016 sino que debe entrar a resolver la misma, en el sentido de suministrarle dentro de los Diez (10) días siguientes la AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA a que legalmente tiene derecho al ser reconocido y registrado como víctima del desplazamiento; así mismo, determinar definitivamente a qué otros derechos puede acceder en la prenombrada condición y sin dilación alguna proporcionárselos.

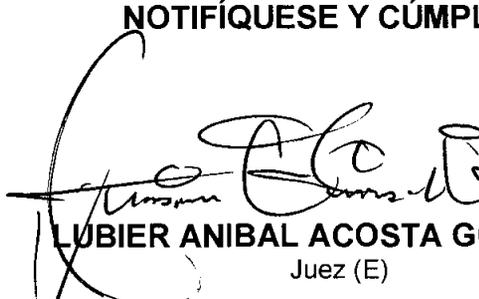
**TERCERO:** Por Secretaria del Despacho en forma inmediata líbrense las comunicaciones para notificar la decisión por la vía más expedita, remitiendo copia de esta providencia a quien represente legalmente la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al Accionante y al señor Agente del Ministerio Público delegado ante este estrado judicial.

**CUARTO:** Sin costas en esta Instancia.

**QUINTO:** Si esta providencia no fuere impugnada, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento, remítase en el menor tiempo posible a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se termina y firma siendo las 12:00 M.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**LUBIER ANIBAL ACOSTA GONZÁLEZ**  
Juez (E)